

## **INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN FINAL**

### **Proyecto “ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D-3D-4D OFF-SHORE EN BLOQUE CAN 100 - CAN 108 - CAN 114”**

**EX-2020-11258246- -APN-DNEP#MHA**

#### **INTRODUCCIÓN. OBJETO**

El presente INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN FINAL (ITRF) se desarrolla en el marco del procedimiento dispuesto por la Resolución Conjunta SE-SAYDS n.º 3/2019 —de la entonces Secretaría de Gobierno de Energía (SE) y la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)— (RESFC-2019-3-APN-SGAYDS#SGP). Por medio de esta se establece que todo titular de un permiso de reconocimiento superficial, permiso de exploración y/o concesión de explotación, proponente de un proyecto en los términos de su Anexo II, deberá cumplir —de forma previa a la ejecución del proyecto— con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) en los términos del artículo 8 del Anexo I de la mencionada resolución.

En particular, el presente INFORME responde al requisito de la revisión técnica final indicada en el último párrafo del artículo 7 del Anexo I de la Resolución Conjunta SE-SAYDS n.º 3/2019. A tales efectos, esta Dirección Nacional de Evaluación Ambiental eleva estas actuaciones al Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, a los fines de lo que estime pertinente.

#### **COMPOSICIÓN DEL INFORME**

El presente ITRF emitido por la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental está compuesto por:

- el análisis contenido en el presente documento;
- el INFORME TÉCNICO de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental (DEIAYARA), registrado como IF-2021-81024704-APN-DEIAYARA#MAD en orden 476, el cual aquí se aprueba y cuyos resultados, en pos de la brevedad, no se reiteran; y
- dos anexos : Anexo I Antecedentes del Informe Técnico de Revisión Final (IF-2021-121929248-APN-DNEA#MAD), y Anexo II Esquema de verificación de las instancias de participación (IF-2021-121545539-APN-DEIAYARA#MAD).

Se procede en el presente documento a analizar y profundizar sobre una serie de temas vinculados al proyecto y sobre otros puntos que, si bien exceden al objeto de

la EIA, ameritan consideración a los fines de dar respuesta a los temas que emergieron tanto durante el transcurso de la audiencia pública como en el período subsecuente.

Los antecedentes de este documento, desde el inicio del procedimiento de EIA hasta la instancia de redacción, se encuentran registrados en el Anexo I. El Anexo II presenta información acerca de la interacción con distintos actores, que resulta necesaria para la comprensión de aspectos específicos relacionados con la participación ciudadana.

Mediante la emisión de este informe, esta Dirección Nacional entiende que se ha verificado la realización de la instancia de revisión técnica final del procedimiento en cuestión, según el artículo 7, Anexo I de la Resolución Conjunta SE-SAyDS n.º 3/2019.

## **EJES DE ANÁLISIS**

Para la conducción de este análisis, fueron considerados los criterios de clasificación que establece el Informe Final (o de cierre) de la Audiencia Pública n.º 1/2021 de IF-2021-65230741-APN-DNEA#MAD. El presente documento menciona los ejes temáticos generales, en el siguiente orden:

1. La planificación energética y el desarrollo sostenible
2. El Estudio de impacto Ambiental y sus componentes
3. El procedimiento de Evaluación Ambiental

### **1. La planificación energética y el desarrollo sostenible.**

#### ***1.1. Matriz energética y cambio climático***

##### ***1.1.1. Sobre el cambio climático y los compromisos asumidos en materia de reducción de gases de efecto invernadero***

Con respecto a los compromisos asumidos en materia de mitigación del cambio climático, cabe mencionar que la meta de mitigación a 2030 de la Argentina es no exceder las 349 MtCO<sub>2</sub>e (millones de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente) de gases de efecto invernadero (GEI). Se trata de una meta ambiciosa, que representa un 27,7% de reducción de la limitación de emisiones con respecto a la presentada en 2016. Es en este contexto que han de enmarcarse los permisos y licencias ambientales de los diversos proyectos.

Desde el Informe de categorización de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental (DEIAYARA), emitido mediante IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD, se ha considerado que las emisiones de GEI correspondientes al proyecto de adquisición sísmica 3D están vinculadas a las emisiones de las embarcaciones a ser utilizadas durante la operación y desplazamiento del buque sísmico y los buques de apoyo, como consecuencia del

uso de combustible para los motores de propulsión, los generadores y cualquier incineración de residuos. Según evaluación técnica efectuada en el Estudio de Impacto Ambiental, la estimación de emisiones para las actividades de adquisición sísmica es de 28.935 toneladas de gases equivalentes a CO<sub>2</sub> en total (0,029 MtCO<sub>2</sub>e). En contraste con los 364 MtCO<sub>2</sub>e generados por el país de acuerdo con el Inventario Nacional de GEI correspondientes al Tercer Informe Bienal de Actualización, elaborado en 2018-2019, se infiere que el impacto sería bajo, conforme lo informa el proponente.

Por su parte, el informe IF-2021-65300480-APN-DNEYP-MEC de la Secretaría de Energía sostiene que la Dirección Nacional de Exploración y Producción (DNEYP) ha tomado conocimiento de las inquietudes expresadas por la ciudadanía respecto a la descarbonización de la matriz energética. En ese sentido, indica que “no es esperable de los proyectos de prospectiva y en particular de las actividades sísmicas un aumento significativo del volumen de gases de efecto invernadero (GEIs) cuantificados a nivel nacional generados a partir de la fabricación de combustibles asociadas a la explotación de yacimientos. Las fuentes de generación de GEIs de los proyectos de sísmica se encuentran principalmente asociadas a la combustión de motores para la navegación y logística”.

Por otro lado, se reconoce que las observaciones de la ciudadanía pueden encuadrarse en la proyección de la actividad más allá de este proyecto en particular, en permisos de exploración otorgados aún pendiente de iniciar y aquellos en proceso de evaluación de impacto ambiental, así como la potencial actividad de explotación costa afuera. Se ha puesto a su vez de manifiesto la necesidad de impulsar un diálogo informado sobre la política energética —en la cual se inscriben los proyectos de prospección sísmica—, que defina los lineamientos para el sector hidrocarburífero en general, conforme a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia climática. Asimismo, en el contexto de la Audiencia Pública n.º 1/2021, se destacó la necesidad de contar con una planificación para la transición energética.

Cabe mencionar que, con posterioridad a la instancia participativa, la Secretaría de Energía emitió la Resolución SE n.º 1036/21, denominada “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030”, que fue publicada en el Boletín Oficial el 1º de noviembre de 2021<sup>1</sup>. Estos lineamientos buscan “contribuir de forma significativa a la reducción de las emisiones GEI” (IF-2021-103828624-APN-SE#MEC, p. 36) desde el sector energético, a fin de cumplir con los compromisos asumidos en materia de cambio climático, considerando el contexto social y macroeconómico actual. Dichos lineamientos se encuentran sintetizados en el próximo ítem.

### **1.1.2. Sobre la transición energética**

Respecto a la necesidad de una transición hacia una matriz energética renovable y la mención a la obsolescencia de la actividad hidrocarburífera, cabe indicar que la Secretaría de Energía (SE) responde acerca de ambas cuestiones en el marco del

---

<sup>1</sup> <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252092/20211101>

informe “*Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector*” de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que fuera mencionado por expositores de la Audiencia n.º 1/2021. En dicha respuesta aclara, entre otros puntos, que “las políticas y acciones sugeridas en ese estudio están principalmente dirigidas a los países miembros de la AIE siendo estos en su mayoría países desarrollados de Unión Europea y EE.UU. El mismo documento enfatiza la brecha que existe entre los países que adoptaron compromisos de “net zero” y sus acciones. En ese sentido puede mencionarse también que, tal como señala la AIE, muchos de esos países incluso habiendo asumido el compromiso de descarbonización energética, continúan previendo el desarrollo de sus recursos fósiles (entre estos se encuentran Noruega, Reino Unido, Australia) (...) La AIE reconoce que (...) cada país deberá diseñar su propia estrategia teniendo en cuenta sus circunstancias específicas. No existe un enfoque único para todas las transiciones justas hacia energías limpias y los planes deben reflejar las diferentes etapas de desarrollo económico de los países” (IF-2021-65300480-APN-DNEYP#MEC ratificado por NO-2021-76729195-APN-DNEYP#MEC).

En relación con la necesidad de una transición hacia una matriz energética basada en energías renovables, la SE, en el Informe IF-2021-65300480-APN-DNEYP#MEC, refiere a los antecedentes de inicio de dicha transición en Argentina, indicando que “entre las acciones asumidas por la SE en el Plan de Acción Nacional del Sector de Energía Versión 1- 2017, actualizado en 2019 incorporado como Anexo II de la Resolución SGAYDS N° 447/2019, se encuentra como medida de mitigación adoptada para la reducción de GEIs del sector la sustitución de combustibles fósiles carbono-intensivos (carbón, fuel oil y diésel) por gas natural para la generación de energía eléctrica conectada a red (....) En virtud de los antecedentes nacionales, la conjunción de una mayor disponibilidad de gas natural con políticas de eficiencia energética y la creciente generación asociada a la nueva potencia instalada a partir de fuentes renovables variables en el marco de los programas RenovAr y MaTer y de la Ley N° 27.191 han redundado en una reducción del uso de combustibles líquidos como el fueloil y el gasoil, los cuales presentan un mayor factor de emisión por unidad de energía entregada... Es importante destacar también que una mayor utilización de gas natural en el sector energético resulta habilitante para catalizar la alta penetración de las energías renovables de generación intermitente y satisfacer los picos de demanda (...)”.

Como fue mencionado, la SE emitió la Resolución SE n.º 1036/2021, denominada “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030”, que plantea en su Anexo I seis objetivos, entre los que se incluye la soberanía energética. Asimismo, los lineamientos mencionados incluyen diversas líneas de acción, entre las cuales se encuentra la gasificación. Dentro de esta línea de acción, las medidas específicas a emprender se vinculan con la producción de gas, la gasificación en el parque automotor y la sustitución de combustibles fósiles con mayor factor de emisión por gas natural en la generación eléctrica.

Esta línea tiene entre sus fines la implementación de medidas tendientes a gasificar consumos energéticos hoy abastecidos por medio de combustibles líquidos derivados del petróleo. De esta forma, se reducirán las emisiones de GEI mediante un suministro confiable, asequible, continuo y menos contaminante, a la vez que se aprovechan los

recursos del país. En dichos lineamientos se indica que “a través del desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global, colaborando con la viabilidad de las transiciones energéticas de otros países” (IF-2021-103828624-APN-SE#MEC, p. 37 de la Resolución SE n.º 1036/2021).

## **1.2. Desarrollo sostenible**

En el marco de la Audiencia Pública n.º 1/2021, según se encuentra registrado en el correspondiente Informe Final de la Audiencia Pública, se mencionó que el fomento a la exploración y explotación de gas y petróleo costa afuera contraría los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, específicamente el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, y el ODS 14 “Vida submarina”.

Adicionalmente, se hizo mención al derecho a un ambiente sano para las actuales y futuras generaciones, reconocido en nuestra Constitución Nacional. También se hizo alusión a la necesidad de comprender el paradigma de los pueblos originarios para lograr un desarrollo sostenible.

Con respecto a estas apreciaciones, cabe mencionar que la evaluación ambiental (EA), en esencia, debe asegurar la consideración de la sostenibilidad en la planificación del desarrollo y en la toma de decisiones.

Nuestro país ha definido lineamientos de política ambiental entre los que se encuentra la protección del derecho a un ambiente sano, el cumplimiento de los ODS, la consideración del principio de equidad intergeneracional y los enfoques de género, diversidad e interculturalidad —entre otros— en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos.

En este sentido, la solidez técnica e institucional en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) permitirá otorgar licencias ambientales bajo el fundamento de los mejores estándares a nivel internacional. Se garantizará de este modo una gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales, y se contribuirá a mejorar la eficiencia de las inversiones públicas y privadas, alcanzando los objetivos de esas inversiones de manera sostenible, en el marco de una gestión ambiental adaptativa.

En línea con lo antedicho, la EIA se erige como un instrumento de política pública y de gestión que permite incorporar, verificar, decidir y gestionar diversas iniciativas, considerando los compromisos, objetivos y lineamientos ambientales de una manera práctica, tangible y territorial.

A este respecto, cabe mencionar que, en septiembre del año 2015, la Argentina adhirió a la iniciativa internacional plasmada en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (A/RES/69-315). Los Objetivos del Desarrollo Sostenible instan a todos los países a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta.

A pesar de que los ODS no son jurídicamente vinculantes, los países que adhieren a la Agenda 2030 deben adoptar los objetivos como propios y establecer marcos nacionales para su logro. En este sentido, en 2020 Argentina presentó el Segundo Informe Voluntario Nacional, que da cuenta de los progresos, estancamientos y retrocesos en la implementación de la Agenda 2030 en Argentina, incluyendo las metas e indicadores de cumplimiento para los ODS 7 y 14 y los organismos de gobierno responsables de su implementación. Respecto del ODS 7 debe estarse a lo manifestado en los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030” aprobados por la SE en su Resolución n.º 1036/2021.

Es importante destacar que las metas del ODS 14 que se vinculan a la conservación de áreas marinas, y de las cuales el organismo responsable es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya han sido alcanzadas por el país. La Argentina cuenta ya con un 10 % de su superficie marina protegida, con la incorporación, en los últimos años, de nuevas áreas, que alcanzan un total de más de 60 áreas protegidas costero marinas (APCM).<sup>2</sup> Asimismo, respecto a la meta de aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, cuyo organismo responsable es el actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se destaca que esta se vincula directamente a la iniciativa Pampa Azul, cuyos referentes han sido consultados a nivel institucional.

Por otro lado, en relación con las expresiones vinculadas al desarrollo sostenible desde el punto de vista de la perspectiva de género y las nuevas generaciones, cabe mencionar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja en articulación permanente con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad e impulsa una serie de iniciativas y programas con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en las políticas ambientales. Su objetivo es fortalecer una gestión ambiental con equidad de género, que permita propiciar relaciones justas y complementarias entre mujeres y varones, al tiempo que deje establecido un enfoque global de los bienes naturales, que tome en cuenta la diversidad biológica y cultural y factores como la posición socioeconómica, el grupo étnico y la edad, entre otros.

Asimismo, se destacó la necesidad de comprender la perspectiva de los pueblos originarios, que en este caso han acercado su visión de manera oportuna, ejerciendo su derecho a participar en la instancia participativa formal determinada para este proyecto. Al respecto, se aclara que en la etapa de categorización no se contempló como necesaria una consulta previa, libre e informada en el marco del Convenio OIT n.º 169, debido a la ubicación del proyecto en costa afuera, sin afectación directa a comunidades originarias.

---

<sup>2</sup>De acuerdo con el Segundo Informe Voluntario Nacional, Argentina 2020, Foro Político de Alto Nivel Sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pp. 204-205. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ivn\\_2020\\_07\\_03\\_0.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ivn_2020_07_03_0.pdf)

## **2. El Estudio de Impacto Ambiental y sus componentes**

### **2.1 El estado del arte del conocimiento del mar Argentino**

Respecto de la mejora del conocimiento del mar Argentino y según explica el informe de la DEIAyARA (IF-2021-81024704-APN-DEIAYARA#MAD) “la propia actividad objeto del proyecto bajo análisis es en sí misma una búsqueda de información de fuente primaria sobre los recursos del lecho submarino del Mar Argentino”. En esta línea y en relación a la justificación de la tipología de proyecto, la SE, en el informe IF-2021-65300480-APN-DNEYP#MEC, indica que la prospección sísmica no solamente se utiliza “para conocer el potencial de los recursos naturales, sino también para conocer las propiedades físicas de las estructuras del subsuelo y sus dimensiones” siendo “una de las herramientas fundamentales para desarrollar el conocimiento del subsuelo de la Tierra”.

Respecto de los usos posteriores que serían realizados con la información obtenida, la SE aclara que “en una campaña de prospección geofísica se realizan las mediciones de los fenómenos físicos asociados a la Tierra, se recopilan datos que serán procesados para su interpretación y modelado geológico con fines académicos o prácticos”, por lo cual “los datos obtenidos de estas campañas son un factor fundamental para el conocimiento de la Plataforma Marítima Argentina” (IF-2021-65300480-APN-DNEYP#MEC). En efecto, la prospección geofísica ha sido fundamental “para fijar los límites de la extensión geográfica de nuestros derechos de soberanía más allá de las 200 millas marinas”, que se han expresado en la promulgación de la Ley n.º 27757 con la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma, incorporando así a la Plataforma Continental Argentina 1.782.500 kilómetros cuadrados, de acuerdo a lo ratificado por la ONU.

Por otro lado, durante la Audiencia y en relación con lineamientos y antecedentes nacionales que tienen el objetivo de aumentar el conocimiento sobre el mar Argentino, también se generó un espacio de consulta específico, con fecha del 26 de marzo de 2021, que consta en el Informe IF-2021-50331884-APN-DEIAYARA#MAD en orden 420, con el Proyecto Interministerial Pampa Azul. Este programa promueve el desarrollo de más y mejores estudios científicos sobre nuestro mar, no solamente acerca de los recursos pesqueros, sino también, y como línea de investigación científica transversal, a nivel de prospección geológica, para asegurar un marco de gestión sostenible de las actividades a desarrollar. Los objetivos de esta línea de investigación a cargo de Pampa Azul son: “estudiar la morfología y calidad del fondo marino en las áreas geográficas prioritarias; analizar la estabilidad del lecho asociado a vías de navegación, obras civiles, zonas de deslizamiento y cañones submarinos; y explorar el potencial hidrocarburífero y gasífero de las principales cuencas sedimentarias”<sup>3</sup>.

Asimismo, el Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas, cuyos objetos se desarrollan en el ítem a continuación,

---

<sup>3</sup> <https://www.pampazul.gob.ar/iniciativa/areas-horizontales/prospeccion-geologica/>

permite la generación de información primaria estandarizada, la cual debe ser presentada a este Ministerio, según versa en la Resolución MAYDS n.º 201/2021.

## ***2.2. El Plan de Gestión Ambiental y sus medidas de mitigación***

### ***2.2.1. Medidas y jerarquía de mitigación***

En relación con las observaciones sobre la suficiencia de las medidas de mitigación propuestas y sus controles, se aclara que, de acuerdo al Informe de la DEIAyARA, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado describe en forma suficiente los lineamientos a seguir para dar cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación propuestas, y se encuentra acorde con lo solicitado en el informe de categorización y alcance (IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD) y los requerimientos realizados por el área (IF-2021-47564334-APN-DNEA#MAD).

En lo que respecta a la actividad pesquera en particular, el PGA ha establecido medidas concordantes con el principio de jerarquía de mitigación (según el cual es preferible primero evitar impactos adversos y luego, en caso de que no puedan ser evitados, se buscará minimizarlos). A tal fin se han definido ventanas temporales para el desarrollo de la prospección sísmica, consideradas como adecuadas por esta autoridad. Asimismo, la Dirección de Planificación Pesquera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca expresa mediante la Nota NO-2021-115877276-APN-DPP#MAGYP (orden 618), de fecha 29 de noviembre de 2021, que “se considera de la mayor importancia que se brinde particular atención a los períodos que se identifican en el estudio de impacto como de menor afectación a los recursos pesqueros y sus pesquerías asociadas tanto para la planificación de las actividades de exploración como para su efectiva realización y el control de la ejecución de las mismas”. En ese sentido, cobra relevancia la verificación y control del cumplimiento de este programa que hace parte de la etapa de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la Resolución n.º 3/2019.

A este respecto, también se aclara que, según lo establece la SE en su IF-2021-36260226-APN-DNEYP#MEC, “previo al inicio de la actividad, el proponente deberá presentar la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y presentar la actualización del PGA en cuanto a la organización, permisos y responsables que a la fecha no es posible precisar debido a la antelación del inicio del proyecto, ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA”.

Además, en relación con los antecedentes que vinculen en forma directa la actividad sísmica con efectos negativos sobre la actividad pesquera, es necesario mencionar que, según la SE en NO-2021-109225272-APN-SSH#MEC, en los últimos diez años se adquirieron más de 80.000 km por sísmica 2D y 25.000 km<sup>2</sup> por sísmica 3D, y que “En ningún caso se registraron ante la Secretaría de Energía incidentes ambientales ni situaciones de contingencia asociados a estos proyectos, como tampoco fue notificada la Secretaría de Energía, respecto de algún efecto negativo, durante este periodo, en el cual se vincule directamente a la prospección sísmica con la actividad pesquera”.



En forma complementaria, se debe tener en cuenta que durante este año 2021 fueron sancionadas por este Ministerio nuevas resoluciones relevantes que promueven medidas de gestión en relación con la protección de la fauna marina. Si bien estas no estaban presentes al inicio del procedimiento de EIA para este proyecto puntual, se trata de regulaciones que se encuentran vigentes y son de cumplimiento obligatorio. En primer lugar, la Resolución n.º 201/2021<sup>4</sup>, que aprueba el Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas, tiene un doble objetivo: por una parte, implementar medidas de mitigación específicas en el marco del Plan de Gestión Ambiental para evitar y reducir el impacto de las prospecciones sísmicas sobre la fauna marina; y, por la otra, promover la estandarización de la información generada sobre las ocurrencias y comportamientos de ejemplares o grupos de fauna que pudieran ser observados, promoviendo así el conocimiento de fuente primaria de las especies registradas.

Con respecto a la actividad de los observadores de fauna marina para evitar y mitigar impactos, cabe destacar que el protocolo mencionado no refiere meramente a la actividad de “observación” en referencia exclusiva a la capacidad visual. Por el contrario, su alcance remite también al monitoreo acústico pasivo como actividad profesional complementaria, siguiendo las mejores prácticas establecidas a nivel regional para la regulación de esta actividad.

Respecto de la necesidad de una red regional y federal para el monitoreo de varamientos, se cuenta con la reciente sanción de la Resolución n.º 218/2021<sup>5</sup>, en sintonía con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que crea la Red federal de asistencia a varamientos de fauna marina. La Red tiene como objetivo favorecer la articulación y cooperación entre las jurisdicciones de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos nacionales, la sociedad civil e instituciones científico-académicas ante eventos que involucren fauna marina en situación de vulnerabilidad por varamientos o arribos a costas.

### **2.2.2. Contingencias y posibles impactos sobre el turismo**

En referencia a los potenciales efectos sobre el turismo de las ciudades costeras ante posibles derrames de hidrocarburos, se observa que este punto ha sido abordado en el IF-2021-81024704-APN-DEIAYARA#MAD. En ese informe, se menciona el ítem Observaciones durante la Audiencia Pública respecto al riesgo de ocurrencia de derrames de hidrocarburos, habiendo constatado que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en su PGA incluye un Programa de manejo de hidrocarburos y un Programa de respuesta ante emergencias. Se reitera también la opinión de la SE en NO-2021-36268507-APN-DNEYP#MEC e IF-2021-36254566-APN-DNEYP#MEC, al afirmar que “El proyecto objeto de la audiencia implica el relevamiento de datos geofísicos, utilizando un buque sísmico con el propósito de recabar información necesaria para el conocimiento de la zona a efectos de determinar o descartar la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo. Es decir, que esta instancia no conlleva perforación de pozos, ni instalaciones de producción, sino que solo será de obtención de datos

---

<sup>4</sup> <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246234/20210630>

<sup>5</sup> <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246606/20210707>

preliminares. Dicho esto, la probabilidad de derrames de hidrocarburos producto de la actividad sísmica está asociada a la navegación de las embarcaciones, esto es, a los potenciales incidentes de derrames de combustibles considerados en el EslA con sus correspondientes medidas de mitigación.

*Cabe mencionar que las embarcaciones deben contar, antes de iniciar sus actividades, con las autorizaciones y certificados en vigencia emitidos por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (PNA) que es la Autoridad de Aplicación en el mar y además deben contar con un plan de contingencias también aprobado por PNA". A su vez, la SE en NO-2021-109225272-APN-SSH#MEC indica que "es importante mencionar que las posibles implicancias ambientales en las actividades de prospección sísmica son relativas a las actividades de los buques de tránsito o buques pesqueros como son la colisión, ya que no se asocian incidentes de derrames de hidrocarburos a actividades sísmicas precisamente por las características de la actividad".*

Por todo esto, se considera que las medidas de mitigación y los programas dentro del plan de gestión ambiental ya evaluados, en complemento con la documentación que deberá obtener la aprobación del PNA<sup>6</sup> previa ejecución del proyecto, son medidas suficientes para gestionar las contingencias o emergencias que pudiesen afectar al turismo costero en el marco de este proyecto.

### **3. El procedimiento de Evaluación Ambiental**

#### **3.1. La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)**

La EAE es un instrumento que permite incorporar los aspectos ambientales al diseño, planificación y adopción de programas, planes y políticas gubernamentales. Se encuentra regulada por Resolución SAYDS n.º 434/2019, publicada en el Boletín Oficial en noviembre de 2019, con alcance a los órganos de la Administración Pública Nacional.

La citada resolución menciona entre los objetivos de la EAE fortalecer el marco para la EIA de proyectos vinculados a las políticas, planes y programas gubernamentales con una perspectiva integral y de largo plazo. Así se vuelven evidentes la complementariedad y sinergia entre ambas evaluaciones.

La resolución establece también que quien tiene la facultad de iniciar el procedimiento es el organismo del Poder Ejecutivo Nacional que promueve la política, plan o programa, identificado como "organismo promotor" de determinada planificación. De este modo, la resolución no establece a la EAE como un procedimiento obligatorio para los organismos nacionales, sino que busca promover el uso de la herramienta de manera gradual.

Vale destacar que esta resolución abona al mandato de la Ley n.º 25675, Ley General del Ambiente, que establece en el artículo 5 "que los distintos niveles de gobierno

---

<sup>6</sup> Tal como indica el IF-2021-39679686-APN-DPAM#PNA es la "Autoridad de Aplicación en todo lo relativo a los controles y exigencias en la gestión de los hidrocarburos y sus derivados, mercancías peligrosas, sustancias líquidas que se transporten como carga a bordo de los buques (...)"

integrarán en todas sus decisiones y actividades, previsiones de carácter ambiental, que aseguren el cumplimiento de los principios enunciados en la misma ley”. También es coherente con la recientemente sancionada Ley n.º 27566, que ratifica el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este establece en el artículo 7, apartado 3 que “Cada Parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones (...), relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente”.

Con lo expresado hasta aquí, es necesario mencionar que la Resolución n.º 434/2019 SAYDS fue emitida con posterioridad a la Ronda 1 de exploración de hidrocarburos en el mar Argentino y del otorgamiento de los permisos de exploración de las áreas por parte de la SE. Por lo tanto, podría ser aplicable para futuras rondas, planes o programas en el marco de una gestión ambiental adaptativa, toda vez que el organismo promotor de la planificación energética lo considere necesario.

Si bien el MAYDS reconoce la relevancia de las evaluaciones ambientales estratégicas y persigue su promoción, ya que estas proveen los marcos de sostenibilidad para la formulación y valoración de futuros proyectos y alternativas, es necesario recordar que el organismo evaluador se encuentra, en el marco normativo vigente, en la obligación de realizar la correspondiente EIA de los proyectos bajo su competencia aunque no se encuentren abarcados por una previa EAE.

### **3.1.1. Los impactos acumulativos**

Con respecto a los estudios de impactos acumulativos, si bien la EAE puede incluirlos, difieren en su alcance, profundidad y proceso participativo —que es mayor en esta última evaluación—. Corresponde aclarar que los impactos acumulativos refieren a la incidencia de los efectos sucesivos, incrementales o combinados de varios proyectos u actividades, en un escenario espacio-temporal determinado. En el caso de este proyecto, es el primero que ha cumplimentado el proceso de revisión técnica en pos de llegar a la instancia de audiencia pública, para luego ser objeto de la presente revisión final dentro del procedimiento de EIA liderado por la autoridad ambiental nacional.

En lo que refiere a los impactos acumulativos, el estudio ha valorado las actividades concurrentes en el área en el Capítulo 8, Programa 2.3 de Prevención de impactos por potenciales interferencias y de coordinación con actividades linderas. Por su parte, el equipo técnico de la DEIAyARA, en conjunto con los organismos públicos consultados en el marco del procedimiento de EIA, ha expresado que la información presentada por el proponente para esta evaluación resulta suficiente para el análisis de impactos (IF-2021-81024704-APN-DEIAYARA#MAD).

El informe de la SE respecto al desarrollo de otras campañas de relevamiento sísmico simultáneas al proyecto, en IF-2021-65300480-APN-DNEYP#MEC ratificado por NO-2021-76729195-APN-DNEYP#MEC, sostiene que en caso “de dar cumplimiento a los requerimientos de la legislación vigente, todos los permisionarios estarían realizando

las actividades que les restan para cumplimentar sus propuestas de inversión antes de finales de 2023. Esto podría interpretarse que se llevarán a cabo relevamientos sísmicos en varias áreas de la Cuenca Argentina Norte (CAN) de manera simultánea. Sin embargo, a los efectos de simplificar la logística y optimizar los costos, las empresas que deben realizar relevamientos sísmicos en áreas cercanas, en general acuerdan contratar el mismo buque y desarrollar sus campañas en forma consecutiva en lugar de contratar buques diferentes para el desarrollo simultáneo”. En este punto no se observa un registro anticipatorio de las operaciones de las prospecciones o un procedimiento establecido por la SE que permita a esta área contar con escenarios de alta probabilidad sobre proyectos concurrentes, simultáneos o superpuestos.

Corresponde recordar en esta instancia, que la SE interviene a lo largo de todo el procedimiento de EIA, tanto en forma previa a su comienzo, otorgando los permisos de exploración, como en forma posterior a la Declaración de Impacto Ambiental, en el seguimiento, control y monitoreo de las actividades.

Además el informe remitido por la SE, reconoce que “previo a la realización de una campaña sísmica se debe cumplimentar con la presentación de un EsIA y obtener la correspondiente DIA. (...) Por lo tanto, en la documentación presentada en cada EsIA se puede verificar si habrá en el área de influencia del proyecto otras actividades de prospección simultáneas y en ese caso el proponente deberá tener en cuenta la ponderación de los impactos y aplicar las medidas de mitigación y monitoreo adicionales que correspondan” (IF-2021-65300480-APN-DNEYP#MEC ratificado por NO-2021-76729195-APN-DNEYP#MEC).

De esta manera, al tratarse del primer proyecto evaluado en materia de prospección sísmica en esa región por esta autoridad ambiental nacional, se aclara que, frente al desarrollo de actividades de la misma tipología por parte de otros proponentes, estos deberán obtener la DIA correspondiente y, para ello, realizar el EsIA donde se contemplen las medidas de mitigación y los efectos sucesivos, incrementales o combinados de varios proyectos u actividades en un escenario espacio-temporal determinado.

### **3.2. Proceso participativo en el marco de la EIA**

#### **3.2.1. La audiencia pública y el marco normativo**

La instancia participativa ejecutada ha seguido el procedimiento definido en la Resolución Conjunta SE-SAYDS n.º 3/2019 y la Resolución SCCDSEI n.º 7/2021<sup>7</sup>, que establece la implementación de procedimientos de consulta o audiencia pública de acuerdo con los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad, y la instrumentación de la audiencia de acuerdo con lo establecido en el Decreto n.º 1172/03.

---

<sup>7</sup> <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-7-2021-350884>

En consideración de este marco normativo, se ha dado cumplimiento a los plazos, la difusión y las condiciones establecidas en el Decreto n.º 1172/03, considerando la particular situación sanitaria generada por la pandemia COVID-19. Aun en cumplimiento de las restricciones a la presencialidad impuestas por las normativas nacionales, se ha profundizado el acceso a la participación en la Audiencia Pública n.º 1/2021. En ese sentido, la audiencia pública ha sido realizada en forma virtual, mediante una plataforma digital de videoconferencias, lo que facilitó la participación activa de personas que se encontraban en diversas locaciones y que se inscribieron como expositoras. Basta observar la inscripción de 522 personas en nombre propio o en representación de terceros, quienes participaron desde 20 provincias distintas, para valorar la difusión de la convocatoria y la oportunidad de participación activa.

A su vez, la audiencia pública se transmitió en vivo por el canal de YouTube del MAyDS, lo que contribuyó al seguimiento y participación —en carácter de oyentes u observadoras— de aquellas personas interesadas en el tema. La instancia contó además, durante todo el proceso, con intérpretes en lengua de señas argentina, para la inclusión de aquellas personas con discapacidad auditiva.

Sobre el acceso a la información, tanto la documentación producida con anterioridad a la audiencia que fue parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto como la información surgida a partir de la audiencia, han sido puestas a disposición oportunamente en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En forma previa a la audiencia, toda la documentación, antecedentes y estudios del proyecto en evaluación (que fueron enumerados en el Anexo I de la RESOL-2021-7-APN-SCCDSEI#MAD) fueron publicados de manera organizada en el sitio web: <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/audiencia-publica-012021>, de acceso libre. Dicha información estuvo a disposición pública en el sitio mencionado a partir del 11 de junio de 2021, es decir, los 20 días previos a la audiencia. Se incluyó allí la normativa aplicable, el expediente completo del procedimiento EIA y del llamado a audiencia pública, así como documentos técnicos vinculados a la revisión del Estudio de Impacto, los cuales se enumeran a continuación:

- Documento de divulgación
- Aviso de proyecto
- Precategorización
- Categorización y términos de referencia
- Estudio de impacto ambiental
- Informes técnicos de áreas externas
- Informe técnico de revisión
- Aclaraciones del proponente

Respecto a la difusión y oportunidad de participar en la audiencia, cabe destacar que aquellas personas que no pudieron inscribirse en forma oportuna manifestaron su voluntad de participar a través de la mesa de entradas del MAyDS, y se aceptaron 16 oradores fuera de orden a lo largo de los tres días de exposición, quienes hicieron uso de su derecho a participar y expresarse. Por otro lado, las personas inscriptas formalmente fueron llamadas tres veces durante la audiencia y contactadas para

participar en el orden del día a través de tres medios de comunicación que aportaron durante la inscripción, incluyendo teléfono de contacto.

Con respecto a la información surgida de la audiencia, las grabaciones de los tres días de la instancia participativa se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Ministerio, las cuales alcanzaron más de 22.400 visualizaciones el primer día, 9.608 el segundo día y 4.426 visualizaciones el tercer día de transmisión. Durante la audiencia se tomó registro taquigráfico de todas las exposiciones, que fue adjuntado al informe final. El área de implementación también efectuó un registro técnico que contribuyó a la elaboración del informe final aprobado por RESOL-2021-14-APN-SCCDSEI#MAD y publicado en <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/audiencia-publica-012021/informe>

Sobre este informe, en instancias posteriores y de acuerdo a la Resolución n.º 3/2019 en su artículo 7, Anexo I, se expiden la SE y el proponente, a fin de complementar o clarificar aspectos surgidos de la participación que consideren necesario sean conocidos por la autoridad ambiental nacional que sustenta el procedimiento de EIA.

Con posterioridad al cierre de la instancia participativa de la Audiencia n.º 1/2021, y a los fines de la toma de decisión, se admitió la presentación ciudadana de RE-2021-80902298-APN-DGDYD#JGM.

A su vez, y en virtud de lo ordenado por Resolución SCCDSEI n.º 16/2021, se procedió a consultar nuevamente a la cartera de energía, quien respondió mediante NO-2021-109225272-APN-SSH#MEC. Asimismo, se consultó sobre la audiencia y la presentación mencionada en el párrafo anterior al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección de Planificación Pesquera, quien respondió mediante NO-2021-115877276-APN-DPP#MAGYP.

Cabe aquí hacer la salvedad en relación con la intervención del Consejo Federal de Pesca; se remite a lo señalado en NO-2021-115877276-APN-DPP#MAGYP. En relación a la identificación del marco institucional, cabe recordar que este término, a los fines de la EIA, refiere a los organismos involucrados en las diferentes etapas del proyecto, sea aquel que otorgue la declaración de impacto ambiental, aquellos que expidan permisos o habilitaciones sectoriales o aquellos que posean poder de policía en relación a determinadas materias, entre otros.

Por último, se remitió NO-2021-116201975-APN-DNEA#MAD a la Subsecretaría Interinstitucional e Interjurisdiccional del MAyDS, por la cual, junto con NO-2021-120914328-APN-SSIEI#MAD, se expidió sobre la implementación de la Audiencia Pública n.º 1/2021 desde su fase preparatoria hasta la etapa final, prestando particular atención al cumplimiento del marco normativo vigente. Así, se “considera que se han cumplimentado las condiciones adecuadas de participación ciudadana en la realización de la instancia participativa de la Audiencia Pública N.º 1/2021 según el marco legal aplicable”. A su vez, aquella autoridad indicó que “la Audiencia Pública 1/2021, ha seguido en lo que a esa instancia de participación pública respeta, los lineamientos exigidos por el ACUERDO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, aprobado por Ley N.º 27.566”

(IF-2021-120910393-APN-DNEAYPC#MAD), todo ello en el marco de progresividad y no regresión.

### **3.2.2. El carácter no vinculante de la instancia de audiencia pública**

La legislación nacional establece la obligación de realizar instancias participativas (audiencia pública o consulta) a la vez que define su carácter no vinculante. A modo de referencia, la LGA n.º 25675 (art. 20) indica que “La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”. En el mismo sentido se expresan el Decreto n.º 1172/03 (Anexo 1 art.6), y la Ley n.º 27566, que ratifica el Acuerdo de Escazú (Anexo. art. 7.1; 7.7; 7.8).

En ese sentido, las observaciones realizadas durante la audiencia por las distintas personas expositoras han sido atendidas por la autoridad de aplicación tanto para la elaboración del Informe técnico de IF-2021-81024704-APN-DEIAYARA#MAD como para la del presente informe, a fin de fundamentar y explicar de qué manera se han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía. Así también, las observaciones realizadas con posterioridad a la audiencia fueron atendidas, como ya se ha mencionado, mediante NO-2021-115877276-APN-DPP#MAGYP, NO-2021-109225272-APN-SSH#MEC y NO-2021-120914328-APN-SSIEI#MAD, y en el presente informe.

La repercusión de la instancia de participación y las demandas de la ciudadanía dan cuenta de la importancia de generar un debate público de mayor alcance sobre la actividad en cuestión, más allá del proyecto específico, de tal forma que las autoridades intervinientes cuenten con información relevante y complementaria a lo desarrollado en la audiencia pública, acerca de las expectativas y preocupaciones de la comunidad, de aquellas personas que se perciben como afectadas o están interesadas en esta tipología de proyectos de exploración sísmica costa afuera.

En relación con la mención a la licencia social durante la audiencia, se aclara que esta no se trata de una figura contemplada en la normativa. En este caso, se considera que la apreciación negativa expuesta por gran parte de las personas participantes excede al proyecto en evaluación, ya que refiere a la actividad en general (de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el mar Argentino), más allá de este o futuros proyectos que se evalúen.

En este contexto, es necesario mencionar que, a partir de la Resolución Conjunta SE-SAYDS n.º 3/2019, se realiza, por primera vez, un procedimiento de evaluación de impacto sustanciado por la autoridad ambiental nacional para proyectos de exploración y explotación costa afuera en jurisdicción nacional, con participación formal en todas sus etapas de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata entonces de la primera instancia de participación pública de su alcance, para una tipología de actividad que ya se desarrollaba en el mar Argentino desde finales de los años 60.



Teniendo en cuenta las razones antes mencionadas, se considera que este procedimiento de EIA constituye un punto de partida para la integración de aspectos sociales y ambientales a la evaluación interdisciplinaria y participativa de los proyectos. En virtud de los principios de no regresión y de progresividad dispuestos por el Acuerdo de Escazú y la LGA, se considera adecuado el proceso de participación realizado, dejando abierta la posibilidad a mejoras progresivas en la implementación de las instancias participativas. Así también fue comprendido por la Subsecretaría Interinstitucional e Interjurisdiccional del MAYDS, que se ha expedido en NO-2021-120914328-APN-SSIEI#MAD.

### ***3.2.3. La consulta temprana en el marco del Acuerdo de Escazú***

Con respecto a la consulta temprana, se ha mencionado, durante la audiencia y en forma posterior a ella, a través de la presentación ciudadana (RE-2021-80902298-APN-DGDYD#JGM) citada en los antecedentes del Anexo I, que “es necesaria una instancia de consulta temprana hacia actores con representación calificada, debido a la entrada de vigor del Acuerdo de Escazú”.

A este respecto, cabe aclarar que desde los términos de referencia (IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD) la autoridad ambiental requirió al proponente que, durante la realización del EsIA, se identifique y consulte en forma temprana a los actores sociales e institucionales que pudieran estar interesados o verse potencialmente afectados por el proyecto. Ello obedeció a un actuar diligente del área, ya que en ese entonces no había entrado en vigencia el Acuerdo previamente nombrado.

A tal fin, durante la elaboración y revisión del EsIA, el proponente envió comunicaciones a 31 actores identificados, poniendo especial énfasis en el sector pesquero. Para ello, remitió vía correo electrónico información sintética del proyecto, dando así la oportunidad de solicitar aclaraciones o preguntas puntuales. De las 31 organizaciones y actores contactados, dos de ellas efectuaron consultas o solicitaron aclaraciones técnicas, a saber: la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) y el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), organizaciones que a su vez participaron como expositoras en la audiencia pública correspondiente (véase el detalle de actores consultados en Anexo II).

Sin embargo, también vale señalar que las normativas vigentes vinculadas a participación pública, incluyendo al Acuerdo de Escazú, no hacen mención alguna al concepto de “participación calificada”. Por el contrario, la instancia de participación desarrollada se ha basado en los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad (Decreto n.º 1172/2003, artículo 5º). En el mismo sentido, el propio Acuerdo de Escazú promueve en su artículo 3º inciso a) el principio de igualdad y el principio de no discriminación, los cuales han sido debidamente considerados en las instancias participativas previstas.

En relación con la modalidad de realización de la consulta vía correo electrónico, se aclara que en las especificaciones técnicas (términos de referencia) se solicitó la identificación y mapeo de actores siguiendo la orientación de la Guía para Fortalecer



la Participación Pública y la Evaluación de los Impactos Sociales. Con respecto a la modalidad requerida, esta no fue especificada, ya que no se dispone de regulaciones específicas a tal efecto. Por su parte, desde la Ley n.º 27566, en su Anexo y artículo 7.6, se señala, en relación con los medios de consulta, que “el público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales”, no inclinándose por ni desestimando ninguno de ellos. Se reitera que a la fecha no hay procedimiento adicional reglamentado para dar participación temprana a los distintos grupos de interés, más allá de la consulta intergubernamental establecida en el procedimiento EIA de la Resolución Conjunta n.º 3/2019 y el requerimiento de identificación y consulta a los actores clave en los términos de referencia, a cargo del proponente. En sentido similar al Informe remitido por la DEIAYARA (IF-2021-81024704-APN-DEIAYARA#MAD), se coincide con que la etapa de consulta temprana puede ser mejorada, a la luz de esta primera experiencia de evaluación. Los intercambios tempranos con los actores que puedan verse potencialmente afectados por la actividad debieran, progresivamente y a futuro, constituirse en una etapa de mayor relevancia dentro del proceso de evaluación.

Del análisis técnico sobre la participación de los actores surge que aquellos que han realizado la presentación ciudadana de orden 3 del expediente asociado EX-2021-80905800- -APN-DGDYD#JGM fueron oportunamente consultados por el proponente del proyecto, así como notificados de la realización de la principal instancia participativa; esto es, la audiencia pública. A los efectos se adjunta al presente informe el Anexo II, con los resultados del análisis técnico relativos a la consulta con los actores clave identificados por el proponente.

Sin perjuicio de lo expresado, vale aclarar también que, en el marco del procedimiento de EIA, se ha dado intervención desde los inicios del procedimiento a múltiples áreas y organismos, tanto dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como en otros organismos externos científico-técnicos que forman parte del Estado nacional. Según consta en el expediente; las áreas u organismos externos que se expidieron son:

- Dirección Nacional de Exploración y Producción - Subsecretaría de Hidrocarburos-Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación (ME)
- Dirección de Planificación y gestión de pesquerías, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP)
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
- Departamento de Propagación Hidroacústica, Armada Argentina, (Estado Mayor General de la Armada)
- Prefectura Naval Argentina (PNA)

Asimismo, se generó el espacio de intercambio con el Proyecto Interministerial Pampa Azul, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT).

A modo de resumen, es claro para esta Dirección que las potenciales mejoras a la participación temprana no invalidan el proceso de participación desarrollado, que incluyó una consulta temprana a actores clave realizada por el proponente bajo el

requerimiento de la autoridad de aplicación, consultas interministeriales por parte del MAYDS y el cumplimiento de la instancia participativa obligatoria prevista por la LGA, mediante la Audiencia Pública n.º 1/2021. En dicha instancia, todas las personas interesadas han expresado sus opiniones, las cuales han sido consideradas en la elaboración y análisis técnico de los informes que componen este procedimiento. Se han considerado, además, las opiniones presentadas con posterioridad al cierre mediante RE-2021-80902298-APN-DGDYD#JGM. Esto significa que, en materia de instancias participativas, se cumplió con lo regulado hasta la fecha, siguiendo los pasos establecidos tanto en la Resolución SE-SAYDS n./2019 como en el Decreto n.º 1172/03.

Finalmente, corresponde expresar también que, si bien lo establecido por el Acuerdo de Escazú se encontraba vigente al momento de realización de la audiencia pública, este fue ratificado con posterioridad al inicio del procedimiento para el proyecto bajo análisis, por lo cual las exigencias que surgen de su mandato se encuentran en proceso de implementación gradual y progresiva, atendiendo al principio de no regresión y al principio de progresividad (de acuerdo con el artículo 3º del Acuerdo de Escazú y el artículo 4º de la Ley n.º 25675). Así también lo ha considerado la Dirección Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana en su IF-2021-120910393-APN-DNEAYPC#MAD, en NO-2021-120914328-APN-SSIEI#MAD.

En relación con la mención realizada acerca de la identificación del marco institucional, así como la referencia a “contar con la opinión” del Consejo Federal Pesquero, se remite a lo dicho en el ítem 3.2.1.

#### ***3.2.4. El rol del Estado y del proponente en el estudio de impacto ambiental (EsIA) y en la evaluación de impacto ambiental (EIA)***

Durante la audiencia se ha manifestado que sería necesario que los EsIA sean realizados por organismos del Estado nacional. A este respecto se aclara que, la LGA (Ley n.º 25675), en relación con la EIA, en sus artículos 11º 12º y 13º especifica que el proponente de toda obra o actividad deberá presentar, conforme a los requerimientos establecidos, un EsIA y que “las autoridades competentes deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”.

Es por ello que el rol del Estado, en el nivel que corresponda según la normativa específica, consiste en evaluar los impactos ambientales de un proyecto, contando con el EsIA como principal insumo a fin de decidir sobre su viabilidad ambiental en el marco de un proceso de decisión informada. Para cumplir con esta tarea, las autoridades ambientales analizan en forma interdisciplinaria los estudios presentados por el proponente, los someten a pedidos de información adicional o correcciones, dan intervención a otras áreas sustantivas de gobierno y convocan y conducen el proceso participativo definido. Corresponde destacar que los contenidos del EsIA deben contener la información y el análisis que la autoridad ambiental considera necesarios para la comprensión de las implicancias del proyecto.

Cabe señalar que la independencia de roles entre quien realiza el estudio y quien lo evalúa es una práctica general a nivel internacional de todos los países que cuentan con procedimientos de EIA.

En el presente procedimiento de EIA regulado por la Resolución Conjunta SE-SAYDS n.º 3/19, el EsIA posee un alcance determinado por la autoridad en el respectivo Informe de Categorización, en el que la autoridad indica los contenidos mínimos que deberá contener el estudio. Además, y para esta tipología de proyectos, se establece en el Anexo IV de la resolución mencionada, la Estructura y contenidos del estudio de impacto ambiental para proyectos de exploración asociados a actividades de adquisición sísmica.

En este procedimiento de EIA se ha solicitado la corrección o adición de información en la etapa de revisión del estudio, toda vez que se consideró necesario, como consta en el expediente de referencia y se sintetiza en el Anexo I del presente documento. Esta solicitud fue elevada tanto a áreas de este Ministerio como a áreas de los otros Ministerios que intervinieron desde los inicios del proceso hasta la instancia actual.

En esta instancia del procedimiento, y habiendo transitado todos los pasos correspondientes hasta la generación del presente informe, corresponde elevar las actuaciones para la toma de decisión sobre la viabilidad ambiental del proyecto.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN FINAL Proyecto “ADQUISICIÓN SISMICA 2D-3D-4D OFF-SHORE EN BLOQUE CAN 100 - CAN 108 - CAN 114” EX-2020-11258246- -APN-DNEP#MHA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.